

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**

Medellín, cinco (05) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, se procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por GLORYA SOFIA ESCOBAR JARAMILLO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. y OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTIAS S.A. (**Radicado 05001-31-05-010-2019-00416-00**)

ANTECEDENTES

Pretende la demandante, previa declaración de la nulidad por vicios en el consentimiento del traslado al Régimen de Ahorro Individual, que se ordene su retorno de la AFP PORVENIR S. A. a COLPENSIONES y, como consecuencia, se condene a la primera a trasladar a la administradora del régimen de prima media anterior el valor de todas las cotizaciones que hubieren sido realizadas a dicha entidad. Finaliza solicitando que se condene en costas a las demandadas.

Como sustento de sus pretensiones manifiesta sucintamente lo siguiente: nació el 17 de abril de 1964; estuvo afiliada al sistema general de pensiones administrado por el ISS desde el 1 de agosto de 1986 hasta el 1 de julio de 1996, fecha en la cual se trasladó al RAIS; solicitó a Colpensiones su regreso, pero le fue negado por faltarle menos de 10 años para pensionarse; PORVENIR S.A. no cuenta con registro de la asesoría que le brindó para afiliarse al RAIS; para trasladarse al régimen privado de pensiones se le dio una asesoría errada e incompleta, así como una información no veraz; y finaliza anotando que cumplió con el requisito de la reclamación administrativa frente a Colpensiones.

La Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES** dio respuesta oportuna al escrito inicial. Aceptó lo relacionado con la edad de la demandante el reporte de semanas aportadas y el traslado efectuado al RAIS; de los demás hechos manifestó que no le constaban. Se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones, bajo el argumento de que las formuladas carecen de fundamentación fáctica. Como excepciones de **mérito** propuso las que denominó: inexistencia de la nulidad de traslado de régimen pensional, inexistencia de la obligación de reconocer la afiliación al RPM por falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción, buena fe e imposibilidad de condena en costas.

PORVENIR S.A. presentó respuesta oportuna al libelo introductorio. Exponiendo razones de hecho y de derecho, se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones. Frente a los hechos manifestó que no eran ciertos y que no le constaban. Como excepciones de mérito propuso entre otras las que denominó: inexistencia de la obligación, buena fe y prescripción.

Del mismo modo **SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A.** dio respuesta oportuna al escrito inicial, para oponerse a todas y cada una de las pretensiones señaladas por la demandante. Frente a los hechos manifiesta que es cierto que se encuentra laborando desde 1986 y lo relacionado con el pago de aportes efectuado de los seguros; de los demás hechos manifestó que no eran ciertos y que no le constaban. Como excepciones de fondo propuso las que denominó: prescripción, cobro a lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación, buena fe e inexistencia de la obligación.

El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 14 de junio de 2022, dispuso:

PRIMERO: DECLARAR la INEFICACIA del cambio de sistema pensional que realizó la demandante del RPM al RAIS, y de contera sus afiliaciones a otras administradoras de fondos de pensiones pertenecientes al RAIS. Se declara que GLORYA SOFÍA ESCOBAR JARAMILLO ha permanecido afiliada al RPM administrado por Colpensiones, sin solución de continuidad, desde la fecha desvinculación inicia al Sistema General de Protección Social.

SEGUNDO: CONDENAR a PORVENIR S.A. y a SKANDIA S.A. a devolver a Colpensiones dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de

esta providencia, los siguientes guarismos: SKANDIA S.A. con cargo a sus propios recursos trasladará a Colpensiones los descuentos que efectuó a las cotizaciones de la demandante destinados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, los gastos de administración y el valor de las primas del seguro previsional y reaseguros, debidamente indexados a la fecha de entrega al RPM, durante el tiempo en que la demandante estuvo afiliada a este fondo; PORVENIR S.A. trasladará a Colpensiones todos los dineros que reposen en la cuenta de ahorro individual de la demandante, incluyendo sus frutos, intereses, los rendimientos financieros y el bono pensional si hubo lugar a ello. Con cargo a sus propios recursos trasladará a Colpensiones los descuentos que realizó a las cotizaciones con destino al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, los gastos de administración y el valor de las primas del seguro previsional y reaseguros, los cuales trasladará con indexación a la fecha de entrega al RPM, esto durante el tiempo en que la demandante ha permanecido afiliada a esta entidad

TERCERO: CONDENAR a COLPENSIONES, a recibir de PORVENIR S.A y SKANDIA S.A los valores aludidos, y los que reciba de PORVENIR S.A. deberán incorporarlos como aportes pensionales en la historia laboral dela demandante, imputándolos a los periodos en que fueron cotizados en el RAIS, de acuerdo a los IBC en que fueron aportados, los que habrán de tenerse como semanas válidamente cotizadas para el futuro reconocimiento de las prestaciones del Sistema Pensional.

CUARTO: COSTAS como se dijo en la parte considerativa.

QUINTO: Se ordena el envío del expediente a la Sala Laboral del TSM para que surta el grado jurisdiccional de la consulta en favor de Colpensiones, en caso de no ser apelada esta decisión por dicha entidad.

Inconformes con la decisión, interpusieron recurso de apelación los apoderados de PORVENIR S.A. y SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. En lo esencial persiguen los mismos objetivos, entre los cuales solicitan que se revoquen las condenas atinentes al reembolso de lo deducido por gastos de administración y seguros previsionales. Consideran que estos descuentos están autorizados por la Ley 100 de 1993, no financian la pensión de vejez, además existen criterios de la Superfinanciera que establecen que no deben devolverse y los últimos se encuentran en manos de la compañía aseguradora, empresa que cubrió los riesgos respectivos. Por estas mismas razones pueden ser objeto de la prescripción. De igual manera manifiestan que de ser así ostentaría la calidad de enriquecimiento sin causa y se haría el pago a lo no debido. Hacen también énfasis en que el traslado del demandante reunió los requisitos que para el momento establecía la ley, que permaneció por muchos años al RAIS y que hubo una buena administración.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

La Sala restringirá su estudio los puntos objeto de apelación planteados por los apoderados recurrentes, conforme a las directrices que para el efecto traza el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 712 de 2001. Aquellos puntos no recurridos y que puedan considerarse desfavorables a los intereses de Colpensiones, se estudiarán por el grado de la consulta, al tenor de clara directriz jurisprudencial establecida por la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia

Lo primero por decir, es que se encuentran por fuera de toda discusión, por existir plena prueba de ello, el que la demandante nació el 17 de abril de 1964 (arch.3 pág. 6); que se afilió al Instituto de Seguros Sociales, hoy COLPENSIONES, el 1º de 1986 y que permaneció allí hasta que se trasladó al régimen de ahorro individual (arch.11 pág. 18.); que el 1 de julio de 1996 se trasladó al RAIS, siendo la AFP Skandia S.A. (arch. 11 pág. 19); y que estando afiliada a esta AFP se trasladó el 14 de diciembre de 2009, dentro del mismo RAIS, a la AFP PORVENIR S.A (arch. 3 págs. 10 y 12), administradora en la cual actualmente se encuentra afiliada.

El punto básico para esclarecer en esta instancia, acorde con el alcance dado al recurso de apelación oportunamente propuesto, es el relativo a determinar si el traslado **inicial** del demandante del RPMPD al RAIS fue o no ajustado a la ley, y en caso de que no lo hubiere sido, analizar si hay lugar o no a la devolución de aportes, rendimientos y demás ítems. Esto implica establecer, entre otros asuntos, si la voluntad de la accionante al momento de trasladarse del RPMPD al RAIS estuvo afectada por un vicio en el consentimiento o conducta antijurídica semejante.

Para estos fines, y dado el poder vinculante de la jurisprudencia de las altas cortes, entre otras razones porque una de sus funciones esenciales es la de velar por la unidad e integridad del ordenamiento jurídico (art. 86 del CPTSS y 333 del CGP), criterio que ha destacado la Corte Constitucional en muchas de sus

decisiones (véase entre otras la C 539 de 2011 y la SU 354 de 2017), la Sala estima del caso hacer referencia textual a algunos apartes de la sentencia dictada por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia el 8 de mayo de 2019 (SL1688-2019, Rad. 68838, ratificada, entre otras, en las sentencias SL1741-2021, SL1743-2021 y SL1942-2021), la cual compendia para el día de hoy, con total claridad y precisión, además de una adecuada sustentación, el estado de la materia en asuntos de ineficacia de traslados de régimen pensional por falta de una adecuada información, las consecuencias de la declaración dada por los afiliados en los documentos de traslado de régimen, la carga de la prueba, y los alcances de la ineficacia y las re asesorías que se realizan con posterioridad al traslado inicial, entre otros, y que le dan respuesta adecuada, de manera directa o indirecta a los distintos puntos que habrán de estudiarse en esta providencia, en especial al de determinar si la decisión de la juez de primer grado puede o no avalarse. Sobre el deber de información, en ésta quedó dicho:

El anterior recuento sobre la evolución normativa del deber de información a cargo de las administradoras de pensiones podría, a grandes rasgos, sintetizarse así:

Etapa acumulativa	Normas que obligan a las administradoras de pensiones información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales Y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3.º, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle

Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	1748 de 2014 Artículo 3.º del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.º 016 de 2016	Junto Con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.
--	---	--

1.4 Conclusión: La constatación del deber de información es ineludible Según se pudo advertir del anterior recuento, las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. Desde luego que con el transcurrir del tiempo, el grado de intensidad de esta exigencia cambió para acumular más obligaciones, pasando de un deber de información necesaria al de asesoría y buen consejo, y finalmente al de doble asesoría. Lo anterior es relevante, pues implica la necesidad, por parte de los jueces, de evaluar el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico en que debía cumplirse, pero sin perder de vista que este desde un inicio ha existido.

Así las cosas, el Tribunal cometió un primer error al concluir que la responsabilidad por el incumplimiento o entrega de información deficitaria surgió con el Decreto 019 de 2012, en la medida que este exista desde la expedición de la Ley 100 de 1993, el Decreto 663 de 1993 y era predicable de la esencia de las actividades desarrolladas por las administradoras de fondos de pensiones, según se explicó ampliamente.

Adicionalmente, la Sala no puede pasar por alto la indebida fundamentación con la que la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal de Medellín emitió su sentencia, pues sin razón alguna se limitó a señalar que a partir del Decreto 019 de 2012 es imputable responsabilidad por omisión o cumplimiento deficitario del deber de información a las AFP, sin especificar la norma de ese decreto que le daba sustento a su dicho y sin la construcción de un argumento jurídico que soportara su tesis. Es decir, la sentencia estuvo desprovista de una adecuada investigación normativa y un discurso jurídico debidamente fundamentado.

En cuanto a las consecuencias de las constancias que se registran en los formularios de afiliación o traslado, se dijo:

2. El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente. Necesidad de un consentimiento informado

Para el Tribunal el consentimiento informado no es predicable del acto jurídico de traslado, pues basta la consignación en el formulario de que la afiliación se hizo de manera libre y voluntaria.

La Sala considera desacertada esta tesis, en la medida que la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos pre impresos de los fondos de pensiones, tales como «la afiliación se hace libre U voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no informado.

Sobre el particular, en la sentencia CSJ SI. 19447-2017 la Sala explicó:

Por demás las implicaciones de la asimetría en la información, determinante para advertir sobre la validez o no de la escogencia del régimen pensional, no solo estaba contemplada con la severidad del artículo 13 atrás indicado, sino además el Estatuto Financiero de la época, para controlarla, imponía, en los artículos 97 y siguientes que las administradoras, entre ellas las de pensiones, debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios de buena fe «y de servicio a los intereses sociales» en las que se sancionaba que no se diera información relevante, e incluso se indicaba que «Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario.

De esta manera, el acto jurídico de cambio de régimen debe estar precedido de una ilustración al trabajador o usuario, como mínimo, acerca de las características, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de los riesgos y consecuencias del traslado.

Por tanto, hoy en el campo de la seguridad social, existe un verdadero e insoslayable deber de obtener un consentimiento informado (CSJ SI. 19447-2017), entendido como un procedimiento que garantiza, antes de aceptar un ofrecimiento o servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna.

Como consecuencia de lo expuesto, el Tribunal cometió un segundo error jurídico al sostener que el acto jurídico de traslado es válido con la simple anotación o aseveración de que se hizo de manera libre y voluntaria y, por esa vía, descartar la necesidad de un consentimiento informado.

En materia de carga de la prueba del deber de información, anotó:

En consecuencia, si se arguye que, a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo.

Como se ha expuesto, el deber de información al momento del traslado entre regímenes, es una obligación que corresponde a las administradoras de fondos de pensiones, y su ejercicio debe ser de tal diligencia, que permita comprender la lógica, beneficios y desventajas del cambio de régimen, así como prever los riesgos y efectos negativos de esa decisión.

Por último, en cuanto al alcance de la ausencia del deber de información y de los nulos efectos que pueden generar las reasesorías posteriores, quedó dicho:

Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo. Esto, desde luego, teniendo en cuenta las particularidades de cada asunto.

En primer término, porque el traslado al RAIS implicó la pérdida de los beneficios derivados de la transición al no contar la demandante con 15 años de cotización o servicios a 1.º de abril de 1994. Es decir, así se hubiese trasladado la demandante al día siguiente de la reasesoría, de todas formas ya había perdido la transición.

En segundo lugar, porque la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad. Como se dijo, el afiliado requiere para tomar decisiones de la entrega de datos bajo las variables de tiempo e información, que le permitan ponderar costos, desventajas y beneficios hacia el futuro. Desde este punto de vista, un dato solo será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad. Por el contrario, si la asesoría no se otorga oportunamente y, por tanto, pierde su utilidad, ello equivale a la ausencia de información.

Con sustento en estos presupuestos, y sin necesidad de hacer referencia a temas afines a lo planteado, esta Colegiatura considera que la ineficacia solicitada en la demanda debe reconocerse, pues basta la mera ausencia de información al afiliado, clara, precisa y completa, para que se produzca la irregularidad del acto de cambio de régimen pensional, situación que fue exactamente la que ocurrió en el presente caso; a la Sala no le queda la menor duda que las demandadas, en este caso las AFP PORVENIR S.A. y SKANDIA S.A., al no haber arrimado al proceso prueba idónea y completa de la información que se le debió de haber brindado a la señora GLORYA SOFIA ESCOBAR JARAMILLO en el traslado que ésta realizó en septiembre de 1998, y no inferirse esta del interrogatorio de parte que se le formuló, la consecuencia no puede ser otra diferente a la indicada y, por tanto, tener como vinculación válida la que tenía con el Régimen de Prima Media con Prestación definida. Sobra anotar que el registro de “FIRMA DEL AFILIADO Y VOLUNTAD DE AFILIACIÓN” que da cuenta el documento obrante en el archivo 11 página 18 carece de valor probatorio por las razones que quedaron expuestas en la decisión judicial inicialmente transcrita.

Esto que se dice conlleva entonces, acorde con la jurisprudencia antes referida, a que las partes deben ser restituidas al estado anterior (art. 1746 del CCC), esto es, que la afiliación de la demandante con el ISS, hoy Colpensiones, no solo nunca sufrió alteración alguna, sino que la entidad demandada que actualmente maneja la cuenta de ahorro individual del demandante, esto es, PORVENIR S.A., deberá devolver a la administradora del RPMPD todas las cotizaciones a la primera, incluyendo sus rendimientos, gastos de administración, sumas de dinero que retiene o haya retenido para los seguros previsionales, el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y demás descuentos, y Colpensiones a recibirlos, tal como esta Sala y las distintas de esta Corporación lo han venido decidiendo en casos semejantes al presente. Igualmente lo deberá hacer Skandia S.A. por las deducciones que hizo por comisiones de administración, seguros previsionales y Fondo de Garantía de Pensión Mínima, con la indexación correspondiente liquidada al momento del pago y, por supuesto, por el período de tiempo en que la demandante fue su afiliada. Sobre este asunto, y en especial sobre los gastos de administración, es del caso evocar lo que sostiene la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema en la sentencia SL1421-2019, Rad. 56174:

“Conforme a lo establecido en sede de casación, fuerza concluir entonces, que debe declararse la ineficacia de la afiliación del demandante al sistema pensional de ahorro individual, debiendo retrotraerse las cosas al estado en que se encontraban, es decir, como si ello no hubiera ocurrido, lo cual trae como consecuencia, que el actor jamás perdió el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100/93, y de igual forma, que el Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. deba devolver los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, como en oportunidades anteriores lo ha dispuesto la Sala, pudiéndose traer a colación las sentencias CSJ SL17595-2017 y CSJSL4989-2018, donde se rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989 ...”.

Y de manera más precisa, en cuanto a todos los conceptos antes anotados, esta misma Corporación en sentencia del pasado 29 de julio (SL 2877 2020, Rad. 78667), expresó:

“En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.

Ahora, los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional cobija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el accionante en el RAIS, aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implica dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen; en otros términos, es la inscripción en ese esquema pensional la que se cuestiona como una sola, lo que involucra a las demás AFP, así ellas no hayan intervenido, se reitera, en la primera admisión. Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal” (negrilla fuera de texto).

En igual sentido puede verse la SL4803-2021 (Rad. 88879) del 20 de octubre de 2021, en la cual de manera expresa y directa se refirió a la cuenta de ahorro individual, los rendimientos, cuotas de administración, comisiones y descuentos para los seguros de invalidez y sobrevivencia. Se adicionará sí, que las

devoluciones ordenadas deberán realizarse en los términos del artículo 2.2.2.4.8. del Decreto 1833 de 2016.

Con todo lo que fue analizado por esta colegiatura, quedan resueltas las inconformidades planteadas en los recursos de apelación interpuestos por las administradoras recurrentes.

En cuanto a las excepciones propuestas por las entidades demandadas, en especial las que señaló Colpensiones, las cuales se estudian por el grado de la consulta, se tiene que no prosperarán: unas por no envolver hechos extintivos o modificativos de los derechos reconocidos, entre ellas las de inexistencia de la obligación, falta de causa para demandar, buena fe, cobro de lo no debido; y otras, como la de prescripción, por estar comprometido un derecho pensional. En la sentencia inicialmente citada, se anotó:

*“Conforme lo explicado, los afiliados al sistema general de pensiones pueden solicitar, en cualquier tiempo, que se declare la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales y, por esa vía, que se reconozca a cuál de los dos regímenes pensionales (RPMPD o RAIS) se encuentran afiliados. Lo expuesto no es algo nuevo en la jurisprudencia del trabajo, pues incluso desde la sentencia CSJ SL795-2013 ya la Corte había adoctrinado que «el asegurado está legitimado para interponer, en cualquier tiempo, reclamos relacionados con la **afiliación**, las cotizaciones, el ingreso base de cotización y todos aquellos componentes de la pensión».*

Hay que mencionar que así como la declaración de ineficacia es imprescriptible, los derechos que nacen de ello también tienen igual connotación. En efecto, conforme al artículo 48 de la Constitución Política, el derecho a la seguridad social es un derecho subjetivo de orden irrenunciable, premisa que implica al menos dos cosas: (i) no puede ser parcial o totalmente objeto de dimisión o disposición por su titular (inalienable e indisponible), como tampoco puede ser abolido por el paso del tiempo (imprescriptible) o por imposición de las autoridades sin título legal (irrevocable). En este sentido, la jurisprudencia del trabajo ha sostenido que el derecho a la pensión o a obtener su valor real, puede ser justiciado en todo tiempo (CSJ SL8544-2016)”.

En conclusión, el fallo de primer grado se habrá de confirmar en su integridad, con la precisión que las restituciones que se harán en este caso deben ejecutarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.4.8 del Decreto 1833 de 2016.

No existiendo otros puntos que resolver, las costas de las instancias estarán a cargo de las AFP PORVENIR S.A. y SKANDIA S.A., y a favor de la demandante (art. 365-4 del CGP). Como agencias en derecho en ésta se fija la suma de un SMLMV a cargo de cada una de las anteriores.


DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia objeto de apelación, de fecha y procedencia conocidas, con la precisión que las restituciones ordenadas deberán ceñirse a los lineamientos que establece el artículo 2.2.2.4.8. del Decreto 1833 de 2016.

Costas de la instancia a cargo de Porvenir S.A. y Skandia S.A. y a favor de la demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de un SMLMV a cargo de cada una.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310501020190041601
Proceso:	Ordinario
Demandante:	GLORYA SOFIA ESCOBAR JARAMILLO
Demandados:	COLPENSIONES, PORVENIR S.A, OLD MUTUAL S.A
M. P.	CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo:	05/12/2022
Decisión:	CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 6/12/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario